

## ¿AMÉRICA LATINA DOMESTICADA?\*

Desde las calles de Buenos Aires a las montañas de Chiapas; desde el altiplano de Bolivia a los *barrios* de Caracas, las pasadas dos décadas han producido una vibrante y variada serie de oposiciones a las doctrinas neoliberales aplicadas en toda América Latina durante los años ochenta y noventa. La impresión de que se estaba dando una deriva continental hacia la izquierda la confirmó en apariencia una hilera de éxitos electorales de fuerzas nominalmente progresistas: después de Chávez en 1998, llegó Lula en 2002, seguido en los seis años posteriores por Kirchner, Tabaré Vázquez, Morales, Bachelet, Ortega, Correa y Lugo; una tendencia que llevó a muchos a anunciar el óbito del Consenso de Washington, y a preguntar si América Latina podría pasar de ser su víctima privilegiada a su principal sepulturera.

El libro de Michael Reid titulado *Forgotten Continent. The Battle for Latin America's Soul* se diseñó expresamente para contrarrestar esas ilusiones. Lejos de estar desacreditadas, en opinión de Reid, las políticas del Consenso de Washington fueron responsables de sustanciales mejoras en la posición económica de la región. Aunque muy denigradas, son ellas las que han permitido a América Latina experimentar estabilidad en años recientes, y empezar a cerrar el abismo que la separa del mundo desarrollado. Pero para consolidar los beneficios conseguidos en los años noventa, sostiene Reid, debe haber continuidad en la política económica y, sobre todo, estabilidad política que garantice un entorno predecible para los inversores, tanto nacionales como extranjeros. El principal objeto de este libro es el de defender la perseverancia en las recetas económicas de la década de los noventa, y una política de consenso que impida dañinas polarizaciones de clase o ideológicas. Como modelos de este tipo de pragmatismo, Reid cita el gobierno de Lula y la coalición Concertación de Partidos por la Democracia en Chile, representantes de un «reformismo democrático» de centro-izquierda que debe distinguirse de la «autocracia populista» de Chávez. Éste, en opinión de Reid, constituye una seria amenaza para la

---

\* Michael Reid, *Forgotten Continent. The Battle for Latin America's Soul*, Londres y New Haven, Yale University Press, 2007, 400 pp.

región, y sus políticas redistributivas suponen una tentación a la que los electorados no deben sucumbir si quieren conservar y ampliar el progreso efectuado en décadas recientes.

Lo remedios ofrecidos por Chávez y sus imitadores son insostenibles a largo plazo, plantea Reid, y sólo retrasan todavía más a América Latina en su lento camino hacia la prosperidad. Pero también insiste en que los gobernantes de la región deben reducir el atractivo de dichas medidas acometiendo en serio las enormes desigualdades que han proporcionado combustible al populismo, y que también han actuado como un freno al desarrollo. Aquí es donde el Consenso de Washington necesita cierta renovación, de acuerdo con Reid, ya que no resaltaba suficientemente la necesidad de equidad además de crecimiento. Los gobiernos de Brasil, Chile, México y otras partes se han mantenido sensatamente adheridos a los principios macroeconómicos básicos de la década de los noventa; ahora deben intentar combinar esta actitud con un gasto social juicioso y «focalizado» que les permita «crear mayor equidad política y socioeconómica, sin poner en peligro las condiciones para una inversión privada rentable y con ella el crecimiento económico sostenible».

Escrito entre 2004 y 2007, *Forgotten Continent* es producto de la experiencia directa de Reid con el predominio neoliberal en la región. Miembro del movimiento okupa de Londres en los años setenta —obviamente desde entonces ha olvidado las simpatías radicales— Reid viajó a América Latina en la década de los ochenta, trabajó de corresponsal en Perú para BBC, *The Guardian* y *The Economist*. Se unió a la plantilla de esta última en 1990 para cubrir primero México y Centroamérica, después Brasil, antes de volver a Londres a dirigir la sección «Americas» en 1999. No sorprende, por lo tanto, que buena parte del libro recuerde el tono de *The Economist*: el texto está salpicado de evocaciones tipo revista sobre las polvorientas aldeas de Oaxaca o el «caos sucio y dinámico» de los *conos* limeños, y da voz a lugareños seleccionados para añadir interés humano a varios de los argumentos de Reid («la gente hoy vive un poco mejor, admitió Pánfilo Santiago, concejal de educación»). Pero *Forgotten Continent* hace algo más que transferir meramente a un lienzo más grande los argumentos que Reid despliega semanalmente en su trabajo habitual. Está escrito con un acuciente sentimiento de propósito ideológico: proteger contra la destrucción el buen trabajo hecho en la década de los noventa, y reforzar certidumbres convencionales que bien pudieran haber sido sacudidas por la suspensión de pagos argentina o el giro radical en Venezuela, Bolivia y Ecuador.

En ese sentido, representa la suma de un nuevo consenso sobre América Latina: una condición que se refleja ampliamente en la recepción que se ha dado al libro en círculos del *establishment*, donde ha sido objeto de aprobación uniforme. La sobrecubierta resume elogios entusiastas de Fernando Henrique Cardoso —ilustrativo—, «hay que leerlo— y Jorge Castañeda: «una herramienta necesaria y deliciosa de leer»; James Dunkerley añade también su respaldo, calificando el libro de «formidablemente bien informado».

Las reseñas publicadas en la prensa anglófona han sido similarmente halagüeñas: en Reino Unido se ha considerado «erudito» y «meticuloso» [*The Guardian*], «persuasivo» y «convinciente» [*FT*]; en Estados Unidos, «brillantemente investigado» [*The New York Times*], «tardará en ser superado» [*Weekly Standard*] e «integral y erudito» [*The Washington Post*]. El coronel McKay, del US Naval Institute, insistía en que los «encargados de las tomas de decisiones» hemisféricas del gobierno de Obama tienen esta «excelente obra en la lista de libros que deben leer», mientras que en *Foreign Affairs*, Francis Fukuyama concluía que «claramente Reid tiene razón al afirmar que hoy en día se está librando una batalla por el alma de América Latina».

La urgencia moralizadora del sonoro subtítulo de Reid pretende transmitir un sentimiento de frustración con los políticos occidentales que, cree él, se han «olvidado» de todo un continente en medio de las distracciones de Iraq y la Guerra contra el Terror. También éste parece ser artículo de fe para los escritores anglosajones del *establishment*: así Fukuyama observaba en *Foreign Affairs* que «la vista se anima de inmediato» sólo con mencionar la región, mientras que en *Foreign Policy*, en mayo de 2006, el ex ministro de comercio venezolano Moisés Naím se anticipaba a Reid declarando que América Latina se ha convertido en «la Atlántida, el continente perdido», y ha «desaparecido de los mapas de inversores, generales, diplomáticos y periodistas». El artículo de Naím es de hecho uno de los predecesores de Reid en la elaboración del nuevo consenso: también él elogia a Lula y Lagos como «modelos de gobernanza económica más responsable», y se pronuncia a favor de soluciones «moderadas» a los males de América Latina; aparentemente, «lo que más escasea en la región es la paciencia». En un volumen editado en 2004 y titulado *After the Washington Consensus*, John Williamson y Pedro Pablo Kuczynski —respectivamente, codificador inglés del Consenso de Washington y ex primer ministro peruano— abogaban igualmente por la «paciencia» y defendían la necesidad de aplicar «con tenacidad» políticas «realistas»; aunque también recomendaban «prestar más atención a la agenda social». En 2006, el economista de la OCDE Javier Santiso respaldaba igualmente las acomodaciones pragmáticas de Lula y Lagos a la situación económica, en un libro evocativamente titulado *The Political Economy of the Possible*.

Jorge Castañeda, por su parte, hizo una importante intervención el mismo año proponiendo, en un artículo de *Foreign Affairs*, una distinción entre dos izquierdas latinoamericanas —una «moderna, de mente abierta y reformista», la otra «nacionalista», «estridente» y populista— e instando a los políticos occidentales a apoyar a la primera y trabajar para contener a la segunda. Mucho antes de esto, por supuesto, Castañeda había concluido en *Utopía Unarmed* (1993) [*La utopía desarmada*, 1995] que «la única palanca verdadera de la izquierda moderada» era el «ser un mal menor», y que «lo único que queda por lo que luchar es un futuro que es simplemente el presente, y más de lo mismo». Desde que se publicó el libro de Reid, dichos puntos de vista se han reforzado en un libro titulado *Falling Behind* (2008), editado por Fukuyama, que exhorta a América Latina a «seguir políticas eco-

nómicas sensatas» y al mismo tiempo «construir políticas sociales inteligentes» para solucionar la desigualdad, que sigue siendo «una fuente de inestabilidad política».

*Forgotten Continent*, por consiguiente, encaja a la perfección en un conjunto existente de opinión recibida. Pero también representa quizá la expresión más clara del emergente *pensée unique* sobre América Latina, marcado por una mezcla familiar de piadosa retórica contra la pobreza y un pródigo apoyo a las prerrogativas de los inversores extranjeros y las elites nacionales, junto con una incansable insistencia en la necesidad de mantener la política firmemente dentro de los confines de la ortodoxia reinante. Al mismo tiempo, se propone ofrecer lecciones al mundo en general: de acuerdo con Reid, «es difícil exagerar lo que está en juego» en la lucha entre la democracia liberal y el populismo radical. De hecho, «la región se ha convertido en uno de los laboratorios más importantes del mundo para comprobar la viabilidad del capitalismo democrático como proyecto planetario». Más razón, por lo tanto, para tomarse en serio los argumentos de Reid, y esbozar algunos argumentos en contra del consenso renovado al que él aspira a proporcionar una nueva base.

Aunque el núcleo del libro se centra en el periodo transcurrido desde el final de la Guerra Fría, Reid intenta dar peso a su alegato situando sus argumentos en un contexto geográfico e histórico. Comienza con un resumen de las principales características de los países latinoamericanos, empezando por los dos «gigantes» demográficos y económicos, Brasil y México, pasando por los países del Cono Sur relativamente desarrollados como Argentina, Chile y Uruguay, y después una secuencia de países más pobres con poblaciones indígenas mayores: Paraguay y los países andinos de Bolivia, Ecuador y Perú. A continuación se centra en la cuenca caribeña: la paramilitarizada Colombia, la petropopulista Venezuela, los campos de batalla de la Guerra Fría en Centroamérica, los gemelos criollos isleños de Haití y la República Dominicana, y la excepción cubana. También Estados Unidos hace su aparición como país latinoamericano honorario, ahora que unos 40 millones de descendientes de latinos viven allí. A lo largo de su viaje, Reid profiere una serie de banalidades para dar color local («es quizá el equipo de fútbol nacional, con su terca defensa casi imbatible, el que expresa la esencia de la identidad paraguaya»).

Después atiende al enigma de por qué América Latina lleva tanto tiempo retrasada respecto al mundo desarrollado. A este respecto analiza —y rechaza— las explicaciones más extendidas, desplegando una particular irritación respecto a la teoría de la dependencia. Una serie de capítulos históricos cubre entonces el periodo transcurrido desde la independencia en el siglo XIX hasta 1989, proporcionando una explicación reduccionista y tendenciosa en la que la compleja interacción de fuerzas sociales, económicas y políticas se simplifica en una serie de binarios: la historia de América Latina debería verse como «una lucha entre modernizadores y reaccionarios, entre demócratas y autoritarios, entre los privilegiados y los excluidos». En

la reinterpretación francamente extraña que Reid hace del periodo de la Guerra Fría, «reformadores de diferentes tendencias» se vieron obstruidos por la «polarización», mientras radicales de izquierda y derecha se negaban por igual a ceder, todo lo cual abrió el camino a una oleada de golpes militares que, según nos asegura Reid, poco o nada tuvieron que ver con Estados Unidos.

Los capítulos centrales del libro cubren la aplicación y los resultados del Consenso de Washington propiamente dicho, el «reto populista» de Chávez, y la «respuesta reformista» de Brasil, Chile y México. Siguen tres capítulos temáticos, que retratan la transformación a mejor de las sociedades, los Estados y los sistemas políticos latinoamericanos en las pasadas tres décadas. Para concluir, Reid analiza la posición mundial aislada de la región –en apariencia descuidada por Estados Unidos y la Unión Europea por igual– y las razones, no obstante, para un optimismo cauteloso, contra la «persistente negación del progreso por parte de muchos académicos, periodistas y políticos». Esta última parte del libro contiene muchos datos –cuidadosamente seleccionados para apoyar el alegato de Reid, por supuesto– pero en esencia repite, desde diferentes ángulos, las cuatro proposiciones principales que forman el núcleo de su argumento. Las expondremos por separado, antes de ofrecer una perspectiva alternativa a cada una.

La primera afirmación clave de Reid hace referencia a los efectos positivos del Consenso de Washington, cuyos principios básicos fueron codificados en 1990 por Williamson, quien más adelante lamentaría la elección de su nombre por haber sido «un regalo propagandístico para la vieja izquierda». Reid reduce los diez puntos de la receta original de Williamson a tres elementos principales: estabilización macroeconómica, liberalización y privatización. Si la primera fue un medio para controlar la inflación que asolaba América Latina en los años ochenta, la segunda desmantelaría los obstáculos proteccionistas y abriría el camino al comercio y la inversión, mientras que la tercera garantizaría que bienes y servicios se asignasen a través de los mecanismos del mercado. El estudio de Reid hace un seguimiento del progreso efectuado por la región en cada una de estas tres áreas. La estabilización se logró disminuyendo los déficits y recorriendo el gasto público, mientras que la renegociación de la deuda externa bajo el Plan Brady renovó el acceso a los mercados de capitales. También la liberalización del comercio y de las finanzas fue un éxito: Reid señala con aprobación que «a finales de la década de los noventa, América Latina era la región más abierta del mundo en vías de desarrollo». Es la privatización, sin embargo, la que más firmemente se identificó con el Consenso de Washington, y se convirtió en punto focal para la oposición en varios países. A este respecto, hay un cúmulo de «malentendidos»: en Bolivia, el consorcio multinacional dirigido por Bechtel sólo subió las facturas del agua «un 43 por 100 de media», y había «razones válidas» para hacerlo (como «desincentivar el desperdicio», por ejemplo). En opinión de Reid, «en general, la privatización de los servicios públicos fue claramen-

te positiva para América Latina», al promover una mayor eficiencia y aumentos de productividad, al tiempo que mejoraba las infraestructuras. Pero, por desgracia, los beneficios se extendieron poco, y «a menudo no fueron muy visibles», de ahí la innecesaria mala fama de la privatización.

En su balance de situación del Consenso de Washington, sin embargo, Reid admite que los logros económicos generales han sido «relativamente decepcionantes»: el crecimiento alcanzó su máximo a comienzos de los noventa, pero se estancó desde 1998 hasta 2002, la «media década perdida»; la recuperación a partir de 2004, por su parte, debió mucho a los altos precios de las materias primas. La razón para estos resultados tan poco sorprendentes, de acuerdo con Reid, es que «se mantuvieron demasiadas cosas sin reformar»: América Latina sigue sufriendo retraso tecnológico, baja productividad, excesiva regulación, mal transporte e instituciones débiles. La respuesta, por lo tanto, es más de la misma medicina neoliberal; pero esta vez, con «mayor hincapié en la equidad y en la importancia del Estado para alcanzarla», en línea con «el nuevo consenso que están aplicando muchos gobiernos latinoamericanos».

Los principales exponentes de este nuevo consenso (con minúscula) —que combina «el mercado y el Estado, el crecimiento y las políticas sociales» al mismo tiempo que «protege a las empresas de sorpresas desagradables»— son Brasil, Chile y México. El elogio al «reformismo democrático» y a las políticas sociales de estos países es el segundo elemento clave en el alegato general de Reid. En los tres casos retrata una combinación de «políticas económicas eficaces» y «un amplio consenso político» como condiciones previas para el éxito. Así, en Brasil, con los gobiernos de Lula que han asumido la ortodoxia macroeconómica consagrada por su predecesor, la tasa de pobreza ha disminuido y la distribución de la renta, medida de acuerdo con un coeficiente de Gini, es menos desigual. En Chile, los gobiernos posteriores a la dictadura se han aferrado sabiamente a un modelo cuyos cimientos fueron puestos por Pinochet, y que le han servido para alcanzar las tasas de crecimiento más elevadas de América Latina. Los resultados de México son más ambiguos: incluso después del gran avance democrático que llevó a Fox al poder en el año 2000, «la economía siguió retrasada por muchos vestigios del Estado corporativo»; pero el TLCAN ha sido un regalo positivo, que ha permitido a México «diversificar su economía».

Es México el que proporciona el tipo de programas sociales «focalizados» que Reid recomienda: la iniciativa Progresá adoptada por Zedillo, renombrada Oportunidades con Fox, es un plan de «transferencia de efectivo condicionada» (TEC) que vincula las prestaciones recibidas por los padres al hecho de que manden los niños al colegio. En Brasil, Lula combinó varios de los programas de Cardoso contra la pobreza de líneas similares en la Bolsa Familia, que en 2006 pagaba a 11 millones de familias unos 44 dólares mensuales en efectivo. Gracias a la prudencia macroeconómica estos gobiernos han podido aplicar dichos planes; de hecho, Reid sostiene que las reformas neoliberales han liberado para el gasto social recur-

«antes malgastados por las empresas estatales». Además de ser más eficaces, en opinión de Reid las iniciativas públicas de este tipo son «más democráticas que los programas populistas de Perón o Chávez», porque se «basan en la idea de que todo ciudadano como *individuo*, y no como miembro de un grupo político cliente, tiene derecho a educación, sanidad y una red social mínima que le aporte seguridad».

Éstas son las alternativas «reformistas» a la tentación populista encarnada por Chávez, a quien Reid dedica un capítulo entero, intentando desarrollar el tercer puntal de su argumento: una crítica a la opción de izquierda radical en América Latina. El grueso del análisis de Reid a este respecto es un relato de acontecimientos que repite la letanía de las elites venezolanas —el gobierno de Chávez es «menos democrático, abierto y pluralista que el de sus predecesores»— al tiempo que ajustan los datos a su favor. Reid afirma que en 2001 Chávez había «conseguido despertar un movimiento de oposición masivo inclinado a derrocarlo», y «forzado disputas verbales con grupos de interés como los medios de comunicación, la Iglesia católica, los sindicatos y las empresas privadas» aunque no dice de quién eran los intereses que esos grupos pudieran estar representando, y cómo de grande era exactamente este movimiento «masivo». También recurre a un deplorable alarmismo racial al observar que los partidarios de Chávez «tendían a ser venezolanos más pobres y de piel más oscura [...] ligados a él por un lazo casi religioso».

Mezclados con este ejercicio esencialmente ideológico, sin embargo, hay unos cuantos puntos más sustanciales. Reid reconoce que los programas sociales de Chávez han tenido efectos positivos —«de hecho proporcionaron a los pobres urbanos servicios de los que antes carecían»— pero los critica por ser clientelistas en su funcionamiento, opacos en su financiación, y «casi ciertamente insostenibles». Además, «dado el extraordinario aumento de los ingresos derivados del petróleo, el historial de reducción de la pobreza por parte del gobierno de Chávez no destaca» (aunque se abstiene de aportar cifras). Por el contrario, Reid intenta rechazar la idea de que Chávez pudiera formar parte de un emergente bloque radical en el continente: sólo menciona a Morales y Correa para distinguirlos de Chávez, y para eliminar la posibilidad de que sus países emulen a Venezuela, debido a su falta de ingresos comparables por recursos naturales. Los intentos por parte de Chávez de forjar una alternativa al Área de Libre Comercio de América respaldada por Estados Unidos, por su parte, están en opinión de Reid destinados al fracaso.

Por último, el cuarto elemento principal del argumento de Reid, que se mantiene en todo el libro como un hilo ideológico persistente, es que hay un eslabón intrínseco entre las reformas neoliberales y la democracia, y que el factor crucial para garantizar ambas es la «estabilidad política». Reid afirma al comienzo, de manera un poco falsa, que su «principal argumento» es que «por primera vez han emergido en buena parte de América Latina democracias de masas, verdaderas y perdurables», capaces de sopor-

tar diferentes pruebas con lo que él denomina una «resistencia tenaz». Más adelante afirma que «a largo plazo, la democracia y las economías de mercado prósperas se refuerzan mutuamente». La propuesta es suficientemente común, pongamos, en la bibliografía de los años noventa sobre la globalización o sobre las «transiciones» poscomunistas en Europa oriental; en el caso latinoamericano, Reid establece una fuerte relación entre la democratización que tuvo lugar desde finales de la década de los setenta –parte de la «Tercera Ola» de Samuel Huntington– y la aplicación por los nuevos gobiernos elegidos de las políticas de los ochenta, después codificadas por Williamson. En este análisis, las reformas neoliberales formaron parte de una grandiosa negociación democrática, en la que se aseguró el crecimiento económico mediante la adherencia a una macroeconomía de sentido común, y los electorados agradecidos respondieron prefiriendo la estabilidad política centrista –«ni el Che ni Pinochet»– a las demandas de máximos planteadas por la izquierda y la derecha. Éste es el pacto que Reid ofrece como la mejor esperanza para mantener el crecimiento, y que debe defenderse de levantamientos de masas o de proyectos radicalmente redistributivos.

¿Cómo debería evaluarse el argumento de Reid? Tomando en orden las cuatro líneas principales está claro, ante todo, que su evaluación de las repercusiones del Consenso de Washington es excesivamente optimista. Notablemente ausente del balance de situación de las reformas está cualquier mención de la repercusión de éstas sobre el empleo y los salarios reales, ambos duramente golpeados por las ondas sísmicas de la reestructuración neoliberal. Entre 1990 y 2000, de acuerdo con datos de la CEPAL, el desempleo oficial en toda América Latina casi se duplicó, pasando del 5,8 al 10,4 por 100. El porcentaje apenas mejoró en el nuevo siglo: la media de la región siguió por encima del 10 por 100 hasta 2005. En Argentina alcanzó el 19,7 por 100 tras la crisis de la suspensión de pagos en 2001-2002, y en Brasil subió al 12,3 por 100 en 2003; la tasa de desempleo de Colombia se disparó al 19,4 por 100 en 1999, y se mantuvo por encima del 15 por 100 hasta 2005. Además, ninguna de estas cifras tiene en cuenta el pujante sector informal –una tierra de «oportunidades» en opinión de Reid, exenta de las «barrocas leyes laborales» y de la regulación estatal– que en 2004, de acuerdo con la OIT, suponía más de la mitad de todo el empleo en buena parte de la región, y llegaba al 60 por 100 en Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay. El FMI calcula que en México ahora equivale aproximadamente a un tercio del PIB (más que las cifras oficiales totales para la industria y la agricultura juntas).

En todo el continente, la expulsión de millones de personas de puestos de trabajo mínimamente seguros para lanzarlas a un estado de precariedad permanente ha sido uno de los elementos clave de la reestructuración que Reid aplaude. También ha supuesto una presión bajista sobre los salarios, reflejada en el hecho de que la participación del decil inferior en la renta nacional se estancó o incluso descendió en buena parte de la región en la década de los noventa; las cifras de la CEPAL demuestran que cayó de un ya de por sí minúsculo 0,7 por 100 al 0,6 por 100 en Brasil, y se



mantuvo estancado en el 1 por 100 en Perú y en el 1,4 por 100 en México. De nuevo, desde 2000 sólo se han producido mejoras fraccionales: datos de 2006-2007 demuestran que el decil más pobre se repartía un 0,8 por 100 de la renta en Brasil y un 1,5 por 100 en México; aunque se produjeron verdaderas mejoras en Perú, donde en 2003 la cifra alcanzaba el 1,4 por 100. En Colombia, sin embargo, se da una imagen de empeoramiento de la pobreza en el mismo periodo: mientras que en 1991 el décimo inferior recibía un 1,2 por 100 de la renta, en 2005 su participación había caído un tercio, al 0,8 por 100.

Reid aduce una serie de coeficientes de Gini, que calculan la desigualdad en la distribución de la renta, para demostrar que las disparidades entre ricos y pobres se han reducido en buena parte de América Latina, aunque es llamativo que las cifras que da para el conjunto de la región terminan en 1992. En todo caso, dichos números solo miden el abismo entre las rentas: la cantidad que los pobres reciben de hecho no necesita aumentar en términos reales para que éste se reduzca. Ha habido, de hecho, una caída en la porción de renta medida en el segmento superior; pero esto no ha sido a consecuencia de una nivelación social, sino por el contrario del aumento de la proporción de la riqueza del decil más rico representada por beneficios, rentas y dividendos: productos de la apertura financiera del continente que no se captan en los datos de renta habituales. Buena parte de la «inversión extranjera directa» en América Latina desde la década de los ochenta la han efectuado las elites locales con capital estacionado en el extranjero, completando «viajes de ida y vuelta» comenzados en episodios anteriores de huida de capitales: enormes cantidades que deberían tenerse en cuenta en cualquier imagen verdadera sobre la distribución de riqueza en la región.

En este contexto, la oleada de privatizaciones que tuvo lugar en las décadas de los ochenta y los noventa constituyó un impuesto de facto enormemente regresivo sobre los pobres: al garantizar que la provisión de servicios e infraestructuras básicas ya no estuviera financiada por la fiscalidad estatal, sino por el contrario por tarifas cobradas a los usuarios finales cuya capacidad para pagar había sido, como hemos visto, gravemente debilitada. De ahí la resistencia en 2000 al consorcio dirigido por Bechtel en Cochabamba, donde Reid admite a regañadientes que «unos cuantos se vieron obligados a gastar un tercio de su renta en agua», y «las facturas de un pequeño número de consumidores muy pobres se duplicaron». De manera más fundamental, no había una razón económica acuciante para la privatización cuando ésta se puso en marcha: como Carlos Medeiros ha observado en estas páginas (véase *NLR* 55), un gran número de empresas estatales eran rentables, y realizaban aportaciones netas positivas a los balances de situación nacionales, muchos de los cuales no estaban en cualquier caso en déficit. El ímpetu dado a las privatizaciones fue predominantemente ideológico, como indica la asombrosa velocidad y escala del proceso, que en términos relativos superaron a las de cualquier otra región mundial, a excepción de la Europa oriental poscomunista.

¿Qué decir de los modelos «consensuales» de Reid y sus respectivos programas sociales? En primer lugar, debemos cuantificar adecuadamente estos planes «focalizados» y ponerlos en contexto. El programa «Chile Solidario» es el más mísero: de acuerdo con cifras del Banco Mundial, el gasto en dicho programa equivale al 0,08 por 100 del PIB, en un país con una tasa de pobreza oficial en 2006 del 14 por 100 (más de dos millones de personas). Los herederos de Pinochet reciben, por supuesto, un trato mucho más generoso, con un gasto militar anual medio del 3,7 por 100 del PIB desde 2000. El sistema de pensiones subvencionado por el Estado equivale, por su parte, al 5 por 100 del PIB, y contribuye mucho más a disminuir las disparidades sociales. En México, donde la cifra oficial de pobres es ligeramente inferior a los 20 millones, «Oportunidades» es igualmente barato, y cuesta sólo un 0,37 por 100 del PIB. Su importancia queda eclipsada por las remesas enviadas por los mexicanos que trabajan en el extranjero, que alcanzaron en 2008 los 25 millardos de dólares estadounidenses, en torno al 3 por 100 del PIB, y que seguramente tuvieron más repercusión sobre la pobreza que las aportaciones simbólicas hechas por los gobiernos del PRI o del PAN. La «Bolsa Familia de Brasil» es comparable en escala al plan mexicano, con un 0,37 por 100 del PIB, y debería considerarse en el contexto del compromiso de Brasilia de endurecer la disciplina presupuestaria: año tras año el gobierno de Lula ha obtenido excedentes primarios superiores a los recomendados por el FMI, gracias en gran medida al recorte de gasto público en áreas cruciales. En su primer mandato, de acuerdo con Marcio Pochmann, director del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Lula disminuyó efectivamente el gasto en sanidad y en educación en un 7,5 y un 5,4 por 100 respectivamente. Al mismo tiempo, la corrección macroeconómica exigía que se cumplieran los pagos de los intereses de la deuda. La deuda pública brasileña está en gran medida en manos de obligacionistas nacionales, que son de hecho los beneficiarios de una forma de imposición tributaria regresiva; en 2008, recibieron cantidades equivalentes al 10 por 100 del PIB, en otras palabras, aproximadamente 20 veces la cantidad asignada a los programas para combatir la pobreza, y más del doble del presupuesto sanitario; esto en un país donde la mortalidad infantil alcanza el 31 por 1.000 de los nacidos vivos, frente al 6 de Cuba, el 15 de la vecina Argentina y el 23 de China.

Ante esto, los planes sociales «focalizados» que Reid defiende poco más parecen que escaparates piadosos, en medio de las continuas transferencias de enormes recursos a los obligacionistas y la exportación al extranjero de crecientes beneficios derivados de los servicios públicos privatizados. Son el elemento simbólico de redistribución —«homeopática», en expresión de Perry Anderson— diseñado para garantizar la aprobación masiva al continuo proyecto clasista del neoliberalismo. Su carácter ideológico queda claro por la aprobación de Reid a su naturaleza «individual», y por su desprecio de las nociones anticuadas del «derecho a un servicio». Porque tales planes intentan sustituir los derechos colectivos a una porción de la renta nacional por la dependencia atomizada del Estado, y en el proceso ayu-

dan a atrincherar los patrones de pobreza existentes. De acuerdo con un informe publicado en 2007 por el UNRISD, al centrarse en las mujeres como garantes del cumplimiento de los requisitos del plan, también han reforzado los patrones tradicionales de desigualdad de género. Además, al contrario de lo que afirma Reid, estos programas son a menudo tan clientelistas como las prácticas «populistas» que él condena: con Fox, el «Oportunidades» se ha dirigido sobre todo a los distritos electorales rurales con más probabilidades de votar al PAN, mientras que en Brasil, los receptores de «Bolsa Família» deben registrarse para votar si quieren seguir recibiendo los pagos; Chico de Oliveira ha señalado la previsible correlación entre los desembolsos hechos por el plan de CCT y los votos a Lula (véase *NLR* 42).

Pero quizá el argumento más revelador contra dichas medidas «antipobreza» lo plantee el propio Reid, en su análisis de las estadísticas sobre desigualdad. Cita al Banco Mundial al efecto de que «antes de tener en cuenta los impuestos y las transferencias estatales, las rentas en Reino Unido y Suecia no eran mucho más desiguales que las de América Latina», es decir, que los elementos fundamentales para reducir las desigualdades de renta son una tributación progresiva y un sistema de bienestar social desarrollado. Pero es precisamente la capacidad del Estado para establecer ambas lo que las reformas del Consenso de Washington han debilitado. En el caso de la primera, como Reid registra con no poca satisfacción, los tipos impositivos del impuesto de sociedades cayeron de una media del 42 por 100 a mediados de los años ochenta a un 30 por 100 a mediados de los noventa, mientras que el IVA subió del 10 al 15 por 100, una combinación flagrantemente regresiva. Por su parte, la venta de las empresas estatales ha privado a los Estados de los flujos de ingresos necesarios para financiar las políticas sociales, mientras que la austeridad presupuestaria ha perjudicado a los servicios públicos. Se podría decir ante todo que el apartar a los Estados latinoamericanos de los puestos de mando de sus economías —el proyecto que sostiene el Consenso de Washington— es lo que ha impedido la reducción sistemática de la pobreza en la región.

El alegato de Reid contra la alternativa «populista» venezolana es el elemento más débil de todo su argumento, ya que ni siquiera se basa en un despliegue selectivo de datos, sino por el contrario en la ocultación de los verdaderos resultados obtenidos por el gobierno de Chávez (aunque a este respecto al menos Reid, al contrario que otros, tiene suficiente integridad como para no distorsionar activamente las cifras). En la esfera social, han sido innegablemente positivos: la pobreza, que había alcanzado un astronómico 65 por 100 tras la aplicación de la «Agenda Venezuela» impuesta por el FMI en 1996, se ha reducido casi a la mitad desde que Chávez asumió el cargo, pasando del 55 al 31 por 100. De acuerdo con Mark Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research, el gasto social del Estado ha aumentado significativamente, pasando del 8,2 por 100 del PIB en 1998 al 13,6 por 100 en 2006, una cifra que no incluye los programas administrados directamente por PDVSA o por el Fondo de Desarrollo Na-

cional, que alcanzan otro 7,3 por 100 del PIB. Este considerable gasto ha permitido multiplicar por 12 el número de médicos de atención primaria, y reducir la tasa de mortalidad infantil del 21 por 1.000 en 1998 al 16 en 2005. También el desempleo ha caído en la década que Chávez lleva en el poder, del 11 al 7,8 por 100, una evolución facilitada por tasas de crecimiento medias del 13,5 por 100 desde 2003.

El modelo bolivariano presenta, sin embargo, una serie de problemas que no deben despreciarse a la ligera. El principal es que la economía depende abrumadoramente del petróleo, que supone el 93 por 100 de las exportaciones. El ciclo de dependencia se refuerza por el mantenimiento de una tasa de cambio elevada, que ha estrangulado el desarrollo de otros sectores internos que permitirían a Venezuela diversificar su economía. La creación de programas sociales que funcionan en paralelo a las estructuras estatales existentes también supone una duplicación de burocracias, lo cual provoca inevitables ineficiencias así como oportunidades de uso inadecuado de fondos. Políticamente, como Steve Ellner ha señalado en su libro *Rethinking Venezuelan Politics* (2008), el movimiento chavista carece de mecanismos internos para promover la discusión y el debate, algo que sería fundamental para garantizar que mantiene su vitalidad democrática. Pero Ellner señala también que el chavismo no puede equipararse sin más, como afirma Reid, a los populistas latinoamericanos del siglo xx: conjuntamente, el hincapié en la intervención estatal y la promoción de cooperativas de pequeño tamaño plantean un reto más directo a los oligopolios existentes que el que Perón jamás hubiera considerado organizar. En ese sentido, el chavismo no es una mera regresión histórica a los caudillos del siglo xix ni a las figuras carismáticas del xx, sino que por el contrario representa un fenómeno de masas nuevo y genuinamente radical.

¿Qué conexión establece Reid entre el Consenso de Washington y la democratización? El primer gobierno que aplicó las prescripciones neoliberales en América Latina fue, por supuesto, la dictadura de Pinochet. Reid se remueve un poco incómodamente en su asiento al reconocerlo, pero después aplaude el carácter «negociado» de la transición a la democracia en Chile. Incluso en la descripción de Reid, está claro que se trató en esencia de un proceso de amenazas institucionalizadas: «Pinochet se mantuvo como comandante del ejército durante siete años, el gobierno civil estaba controlado por un consejo nacional dominado por militares, y entre los nueve senadores nombrados que daban al aparato conservador un veto sobre el cambio constitucional había ex comandantes militares». Las pensiones de los militares estuvieron también notablemente exentas de las privatizaciones forzosas para el resto del sector público y del sistema de pensiones.

La naturaleza democrática de las «reformas» aplicadas en otras partes también es dudosa. En México, el principal empuje privatizador lo dio Salinas, que subió al poder en 1988 tras unas elecciones descaradamente fraudulentas. Ese mismo año, en Venezuela salió elegido Pérez con un programa

populista, pero nada más subir al poder cambió de sentido para aplicar un programa neoliberal; lo mismo ocurrió en 1989 en Argentina con Menem y en Perú al año siguiente con Fujimori. En muchos de estos casos, la privatización se efectuó mediante decreto presidencial, para evitar la oposición que pudieran presentar los congresos elegidos; Fujimori incluso lo disolvió y suspendió la constitución en un «autogolpe» en 1992. En Brasil, Cardoso cambió la redacción de la constitución para vender activos estatales. Reid admite que ha habido «rudas afirmaciones del poder presidencial», pero las ve como «la excepción, no la regla». Por el contrario, las prerrogativas presidenciales eran cruciales para aplicar el Consenso de Washington, y proporcionaron un medio para romper los «puntos muertos» de la deliberación democrática en nombre de la reforma de mercado.

Por último, Reid evita por completo analizar el impacto de las reformas estructurales sobre las democracias latinoamericanas que han servido para aumentar la influencia de los mercados financieros y de los organismos multilaterales que propician sus intereses. Ya fuese en forma de FMI, agencias de calificación, *hedge funds* o empresas multinacionales, una hueste de actores externos, completamente inmune a la responsabilidad democrática, han aumentado decisivamente su capacidad de decisión sobre el destino de cientos de millones de personas, con el poder para someter a los gobiernos recalcitrantes al soborno o al chantaje para devolverlos a la senda de la ortodoxia macroeconómica.

La vulnerabilidad latinoamericana a las oscilaciones repentinas de las condiciones de mercado ha quedado dolorosamente patente desde el comienzo de la actual crisis financiera. La afluencia de capitales privados, por ejemplo, se redujo a la mitad entre 2007 y 2008, y se espera que este año caiga todavía más. Recientemente la CEPAL proyectaba que la región en conjunto experimentará una contracción del 1,7 por 100 del PIB, pero esto enmascara recesiones más graves en las economías que dependen en mayor medida de los mercados extranjeros, principalmente México, donde el 80 por 100 de las exportaciones se realiza a Estados Unidos, y donde se prevé que el PIB se reduzca un 7 por 100. El desempleo en México ha crecido rápidamente en el último año, y las cifras de parados son significativamente superiores a la media nacional en los estados del norte, donde las maquiladoras tienen más importancia; en total, en los seis meses anteriores a marzo de 2009 se perdieron casi 600.000 puestos de trabajo. En Brasil, los pronunciamientos confiados de que el país se había «desligado» del mundo capitalista avanzado se han demostrado equivocados, como revela la producción industrial; en el último trimestre de 2008, se calcula que se perdieron 800.000 puestos de trabajo. También Argentina sufre la caída de la demanda en el resto del mundo, ya que las exportaciones suponen en torno a la cuarta parte del PIB. La reciente subida del precio del petróleo hace que Venezuela se vea menos perjudicada que sus vecinos andinos, pero los países centroamericanos, donde las remesas tienen un peso proporcionalmente mayor, es probable que se vean fuertemente golpeados por la recesión del Norte.

Reid, que escribía en 2007, esperaba optimista que «la próxima vez que la economía mundial se vea golpeada por la inestabilidad financiera, América Latina no será el principal protagonista», sin tener en cuenta la posibilidad de que una inestabilidad sistémica golpee el corazón capitalista, con el que la suerte económica de la región está ahora cada vez más estrechamente entrelazada. Pero éste es sólo uno de los muchos legados perjudiciales de la época neoliberal en América Latina. Una región históricamente marcada por las profundas desigualdades que ha visto cómo se mantenían cuantitativamente y cómo se ampliaban en el ámbito de la experiencia social. Los superricos se trasladan en helicóptero desde las urbanizaciones fortificadas hasta los rascacielos, mientras que en tierra los pobres a duras penas obtienen un sueldo precario, y entre ellos una estrecha capa intenta emular los patrones de consumo de las clases medias estadounidenses o europeas: esas yuxtaposiciones discordantes son más que una mera continuación del «subdesarrollo». Porque el Consenso de Washington no sólo ha producido sustanciales cambios en la distribución de la riqueza y de las oportunidades, sino también profundos cambios en la estructura de una economía tras otra, mediante procesos de desindustrialización y terciarización, junto con una intensificación de las exportaciones que ha comprimido el consumo interno, a pesar de que la urbanización ha llenado las ciudades de necesidades no cubiertas.

En resumen, la década neoliberal ha legado a América Latina una serie de dislocaciones socioeconómicas que han debilitado progresivamente su potencial de desarrollo autónomo, y aumentado su vulnerabilidad a las sacudidas exteriores. De hecho, las «reformas» que Reid elogia han contribuido de manera fundamental a la inestabilidad y a la desigualdad en la región, y la «estabilidad» que él recomienda para conservar la actual aplicación sólo puede llevar a preparar nuevas crisis para los próximos años. Por supuesto, no debería sorprendernos que esta perspectiva más amplia de los problemas sistémicos provocados por el neoliberalismo no se incluya en *Forgotten Continent*, pero tampoco deberíamos esperar que el mismo conjunto de prescripciones proporcione a América Latina una salida de la posición subordinada que ocupa en los circuitos del capital planetario.